
POLICY PAPER 20

Los movimientos sociales en América del Sur y la cuestión ambiental

Josué Medeiros y Tatiana Oliveira

ABRIL 2012

Josué Medeiros

Doctorando en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad de Río de Janeiro (IESP/UERJ) e investigador del OPSA.

Tatiana Oliveira

Doctoranda en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad de Río de Janeiro (IESP/UERJ) y asistente de coordinación del OPSA.

Fundación Friedrich Ebert, FES-ILDIS

Quito, abril 2012
Av. República 500 – Edificio Pucará, 4to Piso, of. 404
Casilla Postal 17-03-367
Teléfono: (593-2) 2562-103
Fax: (593-2) 2504-337
E-mail: info@fes.ec
E-mail: energiyclima@fes.ec
www.fes-ecuador.org

Este documento fue originalmente publicado por la Fundación Friedrich Ebert en Brasil y el Observatorio Político Sul-Americano OPSA en el idioma portugués. Ha sido traducido al castellano por TW Congresos a pedido del Proyecto Regional de Energía y Clima de la Fundación Friedrich Ebert en Ecuador para su difusión en América Latina.

Traducción: TW Congresos
Edición: Tactilestudio comunicación creativa
Diseño y diagramación: Antonio Mena
Impresión: Offset Gráficas Araujo (083 854 060)

ISBN: 978-9978-94-132-4
Derecho de autor: 038548

FES – ILDIS no comparten necesariamente las opiniones vertidas por los autores ni éstas comprometen a las instituciones en las que prestan sus servicios. Se autoriza a citar o reproducir el contenido de esta publicación siempre y cuando se mencione la fuente y se remita un ejemplar a FES-ILDIS.

Índice

1. Introducción	4
2. Movimientos sociales y redes de activismo global: qué son y cómo es su actuación internacional?	6
La participación de los movimientos sociales en las conferencias internacionales sobre medioambiente	9
3. Los movimientos sociales y la unidad política en la Río+20	15
Las divergencias estratégicas en relación a la agenda pos-neoliberal	15
La centralidad de Brasil en las disputas políticas ambientales	21
4. Los dos campos de los movimientos sociales sobre la Río+20	24
El movimiento sindical y la transición justa	26
Los movimientos sociales anticapitalistas	30
5. Conclusión	38

1. Introducción

El objetivo de este artículo es identificar la posición y las propuestas de los movimientos sociales sudamericanos respecto a los temas que serán discutidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, la Río+20. Además de la agenda gubernamental, que abarca la economía verde y la arquitectura institucional, los movimientos sociales intentan incluir en la discusión posibles modelos de transición del actual sistema de producción y consumo, para otro, fundado en nuevos paradigmas. Sin embargo, debido al desafío de estudiar movimientos sociales locales a través de su actuación internacional, antes de explorar el objeto del trabajo en sí, consideramos necesario entender la forma en que la política global acoge estos modelos y cuáles son los márgenes de acción de esos actores en una esfera que tradicionalmente no les concede voz ni actoría.

A continuación serán consideradas las actividades que están siendo realizadas por los movimientos sociales, en perspectiva de la Conferencia Río+20. Ha quedado claro que existe una dificultad por parte de la sociedad civil en coordinar los diferentes puntos de vista. Las razones serán explicadas a lo largo del texto y se relacionan con el desarrollo de la lucha política en América del Sur en los últimos 20 años, época en que los movimientos sociales formaron parte de un gran movimiento político que derrotó a la derecha neoliberal en sucesivas elecciones presidenciales en la mayoría de los países sudamericanos. Con la llegada de partidos de izquierda y sectores progresistas al gobierno en varias naciones, el campo político que se había unificado contra el proyecto neoliberal a lo largo de la década de 1990, se dividió en polémicas sobre los posibles caminos a ser recorridos dentro de una agenda pos neoliberal y respecto a la forma de encarar las contradicciones que surgieron a partir de la práctica estatal de los gobiernos de izquierda.

La victoriosa acción de la sociedad civil y la derrota electoral de la ideología neoliberal en diversos países sudamericanos, irónicamente, dieron como resultado la imposición de una notable unidad de los movimientos sociales. La disputa política coordinada y unificada a nivel regional se vio obstruida por los desafíos locales. Esas cuestiones van desde la superación de sucesivas crisis económicas a partir de la retomada de las inver-

siones públicas, la distribución de la renta y la aplicación de políticas sociales, hasta la elaboración de mecanismos institucionales de participación que se expanden más allá de los instrumentos tradicionales de representación, restringidos generalmente a la disputa electoral. Súmase a ello el esfuerzo reiterado de legitimación de la Política, en tanto espacio adecuado para conquistas sociales, además de los movimientos sociales y partidos políticos de izquierda que, una vez en el poder, fueron tratados con indiferencia frente a sus equivalentes localizados a la derecha del espectro político.

A pesar de esa situación de fragmentación, fue posible identificar una inmensa movilización de los movimientos sociales para la intervención en la Conferencia Río+20, confirmando la importancia que atribuye la sociedad civil al tema de la crisis ambiental desde la ECO-92. A partir de conversaciones mantenidas con los activistas, entrevistas con líderes, lectura de los documentos institucionales, quedó claro que esos actores están haciendo un profundo esfuerzo para construir la unidad de acción desde los diversos agentes de la sociedad civil. Tal esfuerzo intenta unificar puntos de vista distintos, pero no antagónicos, como el énfasis que ponen algunos movimientos en la crítica al capitalismo, y que por un lado exige una solución sistémica, y por otro, la insistencia de otros actores en disputar la posición de los gobiernos para que las reuniones multilaterales promuevan alguna transición consensuada.

Es plausible suponer que el tema de la crisis ambiental mundial, junto con los movimientos sociales, ejercen la función de cubrir la lucha de la sociedad civil en torno a un objetivo común, antes desempeñada por la agenda neoliberal, y que va más allá de las diferentes perspectivas y las particularidades de la agenda de cada sector o entidad social.

Cabe resaltar que este estudio identificó la centralidad de los movimientos sociales brasileños en la conducción de las disputas políticas ambientales. Esto sucede porque Brasil, además de ser el país sede del evento, es gobernado por un partido de izquierda desde el año 2003, lo que permitió que se amplíe el diálogo entre el Estado y la sociedad civil. De esta manera, los movimientos sociales brasileños han tenido un papel fundamental en las tentativas de forjar la unidad de las propuestas provenientes de la sociedad civil latinoamericana.

2. Movimientos sociales y redes de activismo global: qué son y cómo es su actuación internacional?

Increasingly dense interactions among individuals, groups, actors from states, and international institutions appear to involve much more than re-presenting interests on a world stage. Margaret Keck e Kathryn Sikkink¹

La reciente movilización alrededor de la cuestión ambiental puede ser presentada como síntesis del conjunto de transformaciones que vienen sucediendo en la política global desde el final de la Guerra Fría. Al mismo tiempo en que nace a partir de ese nuevo contexto, representa y resalta sus contradicciones. Esto se debe a que ella encierra en sí misma el tortuoso proceso de apertura, diversificación y complejización de la política, tanto en el plano nacional como internacional, caracterizado por la inclusión de nuevos actores y de nuevas agendas en la escena de los países centrales y periféricos. Además, el desafío ecológico refleja el carácter predatorio del capitalismo, incorporado en las relaciones de explotación que establece en la relación de los hombres con la naturaleza. Un abordaje alternativo de la problemática ambiental deber ser polisémico, capaz de contribuir a que sean restablecidos los vínculos entre ese asunto y demás temas –como género, desarrollo y derechos humanos–.

De hecho, al hacerlo, se coloca en la escena un aspecto que desafía uno de los principios básicos de la política internacional: la soberanía del Estado. Son difusos no solo los efectos y las responsabilidades por la degradación ambiental, sino que, la necesidad de cooperación y la introducción del derecho hacen evidentes el aumento de la interacción entre los niveles nacional e internacional, dificultando la diferenciación de las fronteras entre lo interno y lo externo. La exasperación de los procesos de globalización ocurridos desde los años 1970, han impactado las relaciones sociales, en la medida en que afecta y restringe las preferencias de los gobiernos y de los individuos de los diferentes países. Se ha determinado que la globalización financiera y la integración de los países al régimen internacional de comercio, sumados a la apertura de mercados a lo largo de los últimos cuarenta años y a la masiva adhesión a la ideología neoliberal posterior a 1991, ejercerían una fuerza irresistible sobre la política interna, lo

¹ KECK, Margaret E; SIKKINK, Kathryn. *Activists beyond borders: advocacy networks in international politics*. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1998.

que conduciría a la homogeneización de las políticas macroeconómicas, así como a la disminución de la libertad de los gobiernos para adoptar a su libre albedrío ciertos tipos de políticas². De hecho, se entiende que, naturalmente, se habrían retraído las posibilidades de los gobiernos en lo que respecta a la elección de políticas de bienestar vinculadas al ideario keynesiano. Sin embargo, en la práctica, eso no se encuentra determinado de esa manera. Y, como afirma Boaventura De Souza Santos, los nuevos modelos de desarrollo y de protección social practicados en América del Sur dan al mundo “un poco más de aire para respirar”³.

La actuación transnacional de ciertos movimientos sociales locales y/o su vinculación a organizaciones internacionales más grandes, es un ejemplo vivo de los cambios que vienen sucediendo en el ámbito de la gobernanza global. La mayor participación de esos movimientos puede ser vista en las conferencias de la ONU, en las que, paralelamente a los encuentros oficiales, se realizaban reuniones entre los representantes de la sociedad civil para la elaboración de sus propias recomendaciones sobre los temas. Esa práctica, establecida en la Conferencia de Estocolmo de 1972 sobre el Hombre y el Medio Ambiente, persiste hasta hoy.

En esta sección el objetivo es discutir respecto la actuación internacional de los movimientos sociales en lo que respecta a la problemática ambiental, a partir de la forma en que esos actores utilizaron el contexto de mayor interdependencia entre los niveles interno e internacional, con la finalidad de contribuir al proceso de construcción de las agendas y de presionar a los gobiernos para que asuman compromisos. Para ello presentaremos un esquema general que busca facilitar el entendimiento sobre la interacción de los tres grupos de actores que queremos analizar: Estados, sociedad civil y redes de activismo global.

La localización de esos agentes en diferentes niveles de análisis, no interfiere negativamente en la investigación, ya que precisamente se busca explicitar el sombrío proceso de difusión de valores y normas en el contexto contemporáneo de relaciones sociales globalizadas. La intención es explicar la manera por la cual las ideas promovidas por los movimientos sociales en vinculación con las redes de activismo global se convierten en normas intersubjetivas con efectos prácticos relevantes en el plano político a nivel interno y externo.

La historia de la problemática ambiental en el ámbito de la ONU será tratada de manera separada. En ese segmento se argumenta que el creciente interés de parte de la

2 Sobre la influencia de la globalización en el proceso de toma de decisiones sobre las políticas sociales de los gobiernos, ver: CROUCH, Colin (ed) (1979). *State and Economy in Contemporary Capitalism*. Londres: Croom Helm; John Goldthorpe (1984). *Order and Conflict in Contemporary Capitalism*. Oxford: Clarendon Press; KEOHANE, Robert y MILNER, Helen (1996). *Internalization and Domestic Politics*. Nueva York: Cambridge University Press; PIERSON, Paul (1996). “The New Politics of the Welfare State”. *World Politics* 48 (2): 143-79, enero de 1996; RODRIK, Dani (1997). *Has Globalization Gone too Far?* Washington, DC: Institute for International Economics; BOIX, Carles (1998). *Political parties, growth and equality: conservative and social democratic economic strategies in the world economy*. Cambridge: Cambridge University Press; GARRETT, Geoffrey (1998). *Partisan politics in the global economy*. Cambridge: Cambridge University Press.

3 SANTOS, Boaventura de Sousa. “Respirar é possível”. *Folha de São Paulo*, 02/11/2010.

sociedad civil por el tema, provino fundamentalmente de su vinculación con discusiones sobre la economía política mundial y sobre el desarrollo, lo que es posible observar a partir del tipo de abordaje que se adopta frente a él. La separación en relación a preocupaciones exclusivamente conservacionistas y el reposicionamiento del debate ambientalista en relación a cuestionar las formas de vida en el capitalismo, lo colocó en la agenda actual y finalmente, contribuyó para el activismo de las diferentes sociedades en ese ámbito. Sin embargo, esta es aún una intuición que pretendemos desarrollar sin disponer de las bases empíricas que puedan ratificar esa información. En otra oportunidad se hará un estudio en mayor profundidad sobre este tema.

La interacción entre las dimensiones políticas a nivel interno y externo no será abordada de forma determinista. Aquí el objetivo es adoptar una visión dialéctica del proceso constitutivo mutuo de agendas y normas, en un contexto de internacionalización de las relaciones. Se vuelve innecesario el esfuerzo de fijar una relación causal lineal entre las etapas de producción, reproducción y difusión de las mismas, frente a la comprensión de que buena parte de la actividad política en el plano internacional se dedica, no a la representación de los llamados intereses nacionales, sino a la definición y a la construcción de categorías que confieren inteligibilidad al mundo y orientan la acción política de los agentes⁴.

La acción de actores internacionales tienen el poder de provocar cambios estructurales al interior de los países, a pesar de que no son como ellos desean, debido entre otras cosas, a que la influencia en el proceso gubernamental por parte de los movimientos sociales sucede fundamentalmente a través del ejercicio de producción de utopías y de fabricación de visiones del mundo, capaces de seducir y persuadir a la sociedad civil, alterando de esta forma, sus visiones sobre la realidad. En ese sentido, la proximidad entre los movimientos sociales y la sociedad civil constituye también un recurso estratégico fundamental, en la medida en que el sistema político de los países, aún se orienta por una lógica electoral estricta.

Por ello, pese a la importancia que tiene actualmente la actuación internacional, es necesario tener en mente que el cambio de comportamientos, reglas y normas, incluso en el ámbito de la política gubernamental, parte sobretodo de la movilización de la sociedad civil al interior de las fronteras nacionales. Esto se debe a que, desde el punto de vista de los países periféricos, el derecho internacional debe permanecer soberanista, para poder resistir a la arbitrariedad que proporcionaría la ausencia de derecho o la existencia de un derecho internacional compulsorio e impositivo.

4 FINNEMORE, Martha (1996). *National interests in international society*. Ithaca: Cornell University Press.

La participación de los movimientos sociales en las conferencias internacionales sobre medioambiente

Los movimientos sociales irrumpen en el escenario internacional en los años 1960 y se sirven del “efecto espiral/bumerang”, como mecanismo primordial de transnacionalización de las disputas políticas. Al descartar la posibilidad de diálogo con el gobierno del Estado, los movimientos sociales accionan una red transnacional, a fin de atribuir publicidad a una causa, movilizar la opinión pública mundial y apelar a normas y principios del derecho internacional que legitimen su demanda, además de incitar a los agentes internacionales como estados y organizaciones, a que presionen a aquellos cuyas políticas están siendo analizadas. El surgimiento de nuevas formas de actuación dio como resultado una mayor ebullición política en el plano externo.

El acumulado de conocimientos y el avance de las tecnologías de la información y de los transportes permitieron un cambio en el modo de actuación de los movimientos sociales locales, de las redes de activismo y de las ONGs internacionales. La institucionalización y la burocratización del trabajo de estas últimas, condujo a una especie de división del trabajo social, según la cual las luchas en el ámbito global son reservadas a ellas, al tiempo que la participación política de los movimientos locales permanecería en el registro de una acción descentralizada, poco jerárquica y vinculada a sus bases locales y regionales. Son muchas las explicaciones para esa sectorialización de la acción activista y cambian desde el aumento de la complejidad de la política internacional, lo que demandaría un conocimiento más profundo de las reglas y de las normas en ese campo de actuación, hasta el direccionamiento de las fuentes de financiamiento.

Sin embargo, las redes y las ONGs no son sujetos del derecho internacional, de modo que su desempeño se parece a aquel de los abogados privados, imbuidos del deber de proteger el medioambiente⁵. Aún así, ellas ejercen influencia en la política internacional de tres maneras: (i) a través de la actividad de observación del proceso deliberativo internacional, sin voz ni voto; (ii) *ex ante*, a través de una garantía expresada en el texto de un tratado, que generalmente prevé que esas organizaciones deben participar contribuyendo a la discusión, debido a su conocimiento especializado sobre el tema, en cuyo caso poseen voz; (iii) *ex post*, a través del monitoreo de los resultados y de la implementación de políticas convenidas en un momento anterior, en cuyo caso poseen voz⁶. En lo que respecta a la cuestión ambiental, las redes y ONGs se establecieron como actores relevantes, habiendo sido aceptadas como tales por los sujetos de derecho internacional tradicionales, por las siguientes razones: representan mejor las demandas de las personas afectadas por los cambios climáticos, debido a su proximidad; defienden el derecho internacional de forma irrestricta, pues ayudaron a elaborarlo; son internacionales, no están sujetas a los límites de la política nacional⁷.

5 GURUSWAMY, Lakshman D.; HENDRICKS, Brent R. *International environmental law: in a nutshell*. St. Paul, Minn.: West Publishing, 1997.

6 GURUSWAMY, Op. Cit., p.48.

7 Ibid., Op. Cit., p.46-47.

Se puede buscar una cuarta razón en el contexto histórico en que sucedieron esas transformaciones. El nuevo modelo de acumulación capitalista y la profunda rearticulación de las fuerzas políticas al interior de los Estados, así como en la política internacional, con la crisis del fordismo y el surgimiento de la ideología neoliberal, inyectaron de (des)ánimo nuevo a la actuación política de los movimientos sociales en el mundo. La globalización y la interdependencia entre los países, se convirtieron en temas en los más diversos espacios, evidenciando el entrecruzamiento entre las esferas políticas nacional e internacional. La era neoliberal, la progresiva disminución del papel del Estado como promotor del desarrollo y regulador de las asimetrías existentes en las relaciones de mercado, impactó también la organización y las actividades de las entidades de la sociedad civil. No sólo que algunas redes y ONGs desarrollaron relaciones de proximidad con organizaciones y bancos internacionales promotores de ese ideario, sino que ellas mismas absorbieron funciones antes desempeñadas por esos actores, a través de la tercerización de servicios, tales como su inclusión en la ayuda internacional para el desarrollo.

En la Conferencia de 1972 de Estocolmo, fue establecida definitivamente la participación de las redes y ONGs internacionales vinculadas al ECOSOC en la elaboración de las resoluciones finales de los encuentros. Pero eso no sucedió de manera homogénea y su actuación fue contrarrestada por la acción de las redes y ONGs vinculadas a los movimientos sociales de la periferia.

De acuerdo con Keck y Sikkink⁸, los abordajes sobre medioambiente en el sur global son de carácter eminentemente interdisciplinar. De ahí que a veces se presente una dificultad para identificar a los grupos preocupados con la temática ambiental en esos países. En América del Sur, en la lucha por la redemocratización de los años 1980, fue incorporada la pauta ambiental al contenido de movimientos tan diversos como el sindicalismo, las feministas y los sin tierra. En ese mismo período, a nivel mundial, las organizaciones de izquierda pierden espacios políticos importantes. En el subcontinente americano no fue diferente.

La conferencia de Estocolmo fue marcada por la polarización de las propuestas entre el norte y el sur. El impulso conservacionista de los Estados más desarrollados, fue entendido por los países en desarrollo como una tentativa de obstaculizar los esfuerzos de crecimiento realizados por ellos. En 1983, el choque entre esas visiones sirvió como base para la formación de la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, conocida también como Comisión Brundtland. Esa comisión, compuesta por estados miembros de la ONU, tenía el objetivo de dirimir esa disputa, a través de la propuesta de estrategias de largo plazo que fomentaran el desarrollo sustentable, es decir, un modelo de crecimiento que no contribuyera a la degradación ambiental. En 1987 fue divulgado el informe elaborado por esa comisión, el informe Brundtland, que estableció un modelo para las siguientes conferencias. La búsqueda de la conciliación entre los temas de medioambiente y desarrollo, reflejada en ese informe, es el resulta-

8 Op. Cit.

do de la presión política ejercida por los países en desarrollo, y que fue acompañada por las redes de activismo transnacionales.

En 1989, la resolución n. 44/228 de la ONU, convocó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), conocida también como Río 92, que emanó del surgimiento de nuevos problemas ambientales tales como el desastre de Chernobyl en 1986 y los cambios climáticos. El impacto de las redes, ONGs y movimientos sociales en esa Conferencia fue comprobado a partir de la enorme cantidad de participantes que participaron en las reuniones preparatorias y también en el Foro Global, espacio de discusiones paralelo y no oficial. Esa fue la primera vez en que fueron admitidos en el debate internacional, de forma tan significativa, actores de la sociedad civil. Los comités preparatorios para la Río 92, contaron con la presencia de más de mil cuatrocientas ONGs acreditadas. En esos comités, las entidades de la sociedad civil pudieron participar en las sesiones, con derecho a voz y presentación de documentos a ser propuestos ante los representantes oficiales de los países, a través del secretariado de la Conferencia. Durante el encuentro, las ONGs produjeron 30 tratados alternativos (los Tratados de las ONGs y de los Movimientos Sociales), que fueron adoptados a través del *International NGO Forum*⁹ (INGOF), organización distinta al Foro Global antes citado. Algunas de las ONGs más activas en la Río 92 fueron: Greenpeace, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (UICN), *Environmental Defense Fund* (EDF), *Worldwide Fund for Nature* (WWF) y Amigos de la Tierra.

Merece destaque la memoria de la participación de los movimientos sociales y entidades de la sociedad civil en la Río 92. Lo inédito del compromiso y participación de los activistas sociales en debates oficiales, junto con los gobiernos, creó una responsabilidad global con el concepto de desarrollo sustentable, así como un paradigma de participación que será buscado (y no alcanzado) en todas las cúpulas de la ONU, tanto en el tema del medioambiente como en las demás pautas que los movimientos sociales movilizan, como mujeres, derechos humanos, seguridad alimentaria y otras.

El ex *seringueiro*¹⁰ Julio Brabosa, compañero de Chico Mendes, ex presidente del Consejo Nacional de Trabajadores de Caucho y uno de los principales articuladores de la Alianza de los Pueblos de los Bosques, creado a finales de los años 1980, relata que la sociedad civil tuvo un papel decisivo en las negociaciones de la Río 92 y en la creación del concepto de desarrollo sustentable. Según él

Todas las entidades de la sociedad civil tuvieron acceso a los documentos preparatorios, como sucede en la actualidad. La diferencia es que en aquel momento, los movimientos sociales participaron directamente de la formulación del texto y de los conceptos, en cuanto hoy es necesario convencer a los gobiernos para que incluyan algún tema.

9 En inglés, en el original. (*N. de la T.*)

10 Trabajador de caucho.

Julio Barbosa, actual secretario nacional de Medio Ambiente y Desarrollo del PT¹¹, resalta que los movimientos sociales asumieron una práctica propositiva para garantizar que la Río 92 proveyera orientaciones claras para que los gobiernos tomen acciones contra la crisis climática. Él cita como ejemplos la Carta de la Tierra y la Agenda 21, dos movimientos que, en su construcción, contaron con la participación decisiva de la sociedad civil.

La Carta de la Tierra comenzó como un proyecto de la ONU, juntamente con los movimientos sociales. El propósito era establecer una declaración de principios sobre el medioambiente que fuera adoptada por todos los estados de las Naciones Unidas, con nuevos principios éticos para la producción y el consumo, de combate a la pobreza y de relación con la naturaleza. En el transcurso de las negociaciones de la Río 92, los gobiernos desistieron de firmar la Carta de la Tierra y optaron por suscribir la "Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable". Sin embargo, la sociedad civil mantuvo la movilización alrededor de la carta, organizando un comité internacional y promoviendo cúpulas para discutir, mejorar y aumentar la adhesión al documento. Según la página de la Carta de la Tierra, Brasil, actualmente son más de 4.600 entidades que aceptan el documento como organizador de sus intervenciones éticas y prácticas.

Ya la Agenda 21 tuvo un destino diferente, ya que fue aceptada de manera oficial por el sistema de la ONU en la Río 92. La Agenda 21 consiste en un nuevo paradigma de planificación estatal y formulación de políticas públicas, que tiene como objetivo promover el desarrollo sustentable. Unos de los principios de este nuevo concepto de acción gubernamental es la participación ciudadana en la formulación, implementación y fiscalización de las acciones estatales. Este principio repercute en la alta responsabilidad asumida por los movimientos sociales respecto a la formulación del concepto de desarrollo sustentable y en la construcción de la Agenda 21.

Los actores que participaron de este proceso representan la diversidad del movimiento social y de la sociedad civil tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Las grandes ONGs internacionales marcaron presencia con su experiencia adquirida en los procesos internacionales y con su metodología de acción directa. Greenpeace por ejemplo, que ya poseía legitimidad en los países de Europa, Estados Unidos y Canadá se afincó en Brasil con la Río 92, consolidando así una actuación que había sido iniciada a finales de la década de 1980 en acciones contra la basura tóxica y en el debate sobre la preservación de la Amazonía.

También fue a partir de la Amazonía que el movimiento sindical se introdujo en calidad de protagonista en el debate ambiental. A partir de la actuación de los trabajadores de caucho, la CUT¹² organizó una reunión sectorial de medioambiente, participó de la Alianza de los Pueblos de los bosques y de toda la movilización de la Río 92, asumiendo el debate del desarrollo sustentable y la construcción de la Agenda 21.

11 Partido de los Trabajadores. (*N. de la T.*)

12 Central Única de Trabajadores. (*N. de la T.*)

La CUT participó también de la formación del Foro Brasileño de ONGs y Movimientos Sociales para el Medio Ambiente y el Desarrollo (FBOMS), creado en 1990 para coordinar las acciones de la sociedad civil brasileña con los gobiernos en la Río 92 y en articulación con la sociedad civil internacional. Después de la Conferencia, el FBOMS se mantuvo organizado, aumentando su capilaridad con la adhesión de centenas de entidades y se constituyó en pieza fundamental para la acción de los movimientos sociales brasileños en los espacios de la ONU que siguieron a la Río 92. Otro movimiento que será analizado en este estudio y que forma parte del FBOMS es Vía Campesina. De hecho, los campesinos participaron activamente de las movilizaciones de la Río 92 por entender que el empoderamiento de sus bases sociales, a través de la reforma agraria, es vital para la construcción de otro modelo de producción y consumo.

El activista del MST¹³ que forma parte de Vía Campesina, Marcelo Duraó, cuando se refiere a la memoria de la participación de la sociedad civil, prefiere enfatizar en las derrotas que los movimientos sociales coleccionan desde esa época y en las siguientes conferencias de la ONU, y que terminaron por inviabilizar los avances conquistados con la participación popular en la Río 92: “los acuerdos y compromisos asumidos en las conferencias desde la ECO92, no están siendo cumplidos”, lo que genera un proceso de creación de “metas voluntarias y nuevos acuerdos con otra filosofía (la de mercado) y no compromisos y responsabilidades de forma colectiva y global”.

Esta posición del dirigente del MST no es fruto de una decepción posterior a la Río 92, sino del desarrollo coherente de las posiciones expuestas por el movimiento en junio de 1992, en el artículo “La farsa de la Río 92”:

En aquel mes de junio estuvimos colmados de tantas noticias de la Eco 92, realizada en Río de Janeiro. Por un lado, autoridades de casi todos los países, fingiendo que están decidiendo algo. Por otro, una conferencia paralela que reunió ambientalistas, verdes y folklóricos de todo el mundo, en una gran fiesta.¹⁴

A pesar de que existe diferencia en la memoria sobre la Río 92, todos los movimientos sociales reconocieron los retrocesos de los últimos 20 años, cuando fueron abandonados los diferentes compromisos y el sistema de la ONU se fue cerrando a la participación directa de la sociedad civil. El discurso del eco-socialista Pedro Vivo, miembro de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos, del que forman parte todas las entidades que serán analizadas aquí, sintetiza este diagnóstico:

En 1992 había la legitimidad de la ONU. Actualmente esto no sucede. En cuanto la Río 92 organizó un programa de acciones conjuntamente con la sociedad civil, que apuntaba a otro modelo, la Río+10 significó un retroceso cuando los gobiernos aceptaron las metas del milenio sin indicar cómo alcanzarlas, y la Río+20, también estructurada en torno a un protagonismo exclusivo de los Estados Unidos, habla de Economía Verde.

13 Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra. *N. de la T.*

14 Copiado de <http://www.uff.br/lacta/publicacoes/omovimentodostrabalhadores.htm>, consultado el 12/01/2012.

Actualmente ningún movimiento social que participó de la Río 92 y que está movilizado para la Río+20 está a favor de la economía verde.

Existen diferencias y consensos. Ambos repercuten en las posiciones de los movimientos sociales para la Río+20, lo que hace posible identificar dos estrategias distintas: existen aquellos que priorizan la crítica sistémica, o sea, identifican en el modo de producción capitalista la causa de toda la crisis ambiental y vinculan su superación a la transformación radical del modo de producción y consumo; un segundo campo se articula para convencer a los gobiernos a que adopten medidas de transición entre dos tipos de economía para solucionar la crisis ambiental mundial.

En la siguiente sección serán analizados los dos campos. Inicialmente, cabe registrar que de parte de los movimientos sociales se ha hecho un enorme esfuerzo por unificar la acción política durante la Río+20. Esta unidad es facilitada por el hecho de que los puntos en común entre los dos lados son mayores que las diferencias. Entre los movimientos que defienden la negociación con los gobiernos no hay la ilusión de que sea posible organizar una salida para la crisis ambiental sin transformar el capitalismo, al tiempo que las entidades de la crítica sistémica también trabajan con el concepto de transición.

3. Los movimientos sociales y la unidad política en la Río+20

A continuación presentaremos un conjunto de consideraciones sobre la actuación de la sociedad civil de los países sudamericanos y su articulación en redes, con el objetivo de intervenir en la crisis ambiental actual y elaborar propuestas para el debate que se llevará a cabo en la Río+20. Este ejercicio se justifica debido a que tales movimientos, como cualquier otro actor político, actúan políticamente en un cuadro de posibilidades determinadas por el proceso histórico. Para comprender sus ideas y propuestas es fundamental detallar las circunstancias heredadas por esos activistas sociales. Esto se hará a partir del reconocimiento de que existe un obstáculo fundamental para estudiar esas redes, que consiste en la dificultad de coordinar la actividad política de los movimientos sociales en América del Sur. En segundo lugar, será imposible ignorar el liderazgo asumido por los movimientos sociales brasileños, que, en su calidad de representantes del país sede del encuentro, han trabajado activamente en la preparación y en la movilización de los otros actores sudamericanos.

Las divergencias estratégicas en relación a la agenda pos-neoliberal

Mientras el neoliberalismo fue el proyecto hegemónico en América del Sur, el proceso de convergencia de los movimientos sociales funcionó y fue fundamental para la derrota electoral del neoliberalismo en los diferentes países, lo que puso nuevos desafíos a esta unidad. Las victorias electorales de la izquierda anti neoliberal comenzaron en los años 1990 y ganaron fuerza en los primeros años del siglo XXI, no únicamente a partir de su triunfo en diversos países, sino también al ser confirmadas en reelecciones y con la elección de sucesores cuando no fue permitida la reelección. Las fuerzas progresistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, condujeron en sus países procesos de superación del neoliberalismo. A pesar de ello, la construcción de una nueva agenda no se dio de forma lineal en ninguno de esos casos. La nueva situación de dirigir el gobierno central de un país, después de décadas de haber estado en la acción política opositora y de resistencia, creó un desafío estratégico sobre la mejor forma de construir y definir una agenda pos neoliberal. Los partidos, intelectuales, movimientos sociales del campo anti neoliberal, fueron colocados

frente a una nueva situación de tener que presentar e implementar positivamente sus propuestas y alternativas.

Ese nuevo cuadro generó dilemas y contradicciones, divergencias y en algunos casos, rupturas significativas. Esas vicisitudes surgen por los más diferentes motivos, como la inexperiencia en tratar con la maquinaria pública; los estancamientos económicos internacionales; los limitadores institucionales internos al poder de los presidentes; las diversas concepciones políticas que sustentan esos gobiernos; el carácter autoritario de algunas medidas o la adhesión a algunos puntos del programa neoliberal; el descompás entre las iniciativas del gobierno y las demandas de base histórica; el hecho de que los sectores neoliberales permanecen políticamente organizados en la oposición, muchas veces con amplios poderes en los parlamentos y en los grandes medios de comunicación. Los movimientos sociales reaccionaron a esta nueva situación política de diferentes formas, e incluso entre los países existen muchas diferencias. Es posible identificar dos grupos: los países que forman parte del MERCOSUR y aquellos que formaran la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA).

Para los primeros: Brasil, Argentina y Uruguay, el neoliberalismo tuvo como consecuencia el aumento de la miseria y de la concentración de la renta. A pesar de ello, en estos países existían movimientos y partidos de izquierda que lograron efectivizar una resistencia al proyecto neoliberal incluso a nivel institucional, tales como el PT en Brasil y el Frente Amplio en Uruguay. Argentina tiene la particularidad del peronismo, lo que, junto al hecho de que fue la nación que adoptó de manera más profunda el neoliberalismo, ayuda a explicar el motivo por el cual la crisis económica fue tan profunda en ese país. En el debate estratégico que sucedió en esos países, prevaleció la orientación de construir alternativas al interior de la institucionalidad vigente, considerando que sus sociedades no fueron totalmente desarticuladas por el neoliberalismo. Los impases que se produjeron producto de las experiencias de estos gobiernos se refieren al grado de aceptación que logró la izquierda en relación con las instituciones heredadas de las reformas neoliberales.

El caso brasileño es el más ejemplar. Desde el inicio del gobierno de Lula, fueron mantenidos e incluso profundizados elementos centrales de la política macroeconómica del gobierno anterior, lo que hizo que algunos sectores del movimiento social caracterizaran al gobierno de Lula y al actual gobierno de Dilma, como continuidad del neoliberalismo. Sin embargo, Lula y el PT consiguieron imprimir una serie de políticas sociales y desarrollistas que combatieron la miseria y disminuyeron la concentración de la riqueza, promoviendo el crecimiento con distribución de renta, fortaleciendo el Estado, reconociendo a los movimientos sociales como actores legítimos, implementando una política externa autónoma en relación a los Estados Unidos, lo que permitió que la mayor parte del movimiento social brasileño siga siendo su base de sustentación.

La mayoría del sindicalismo continuó apoyando a los gobiernos del PT. La Central Única de Trabajadores (CUT), la más grande del país, representa el 38% de los sindicatos bra-

sileños y mantiene una relación de colaboración con el gobierno, al tiempo que diverge públicamente cuando no concuerda con alguna política pública o proyecto de ley. A pesar de ello, algunos sectores importantes –principalmente los funcionarios públicos- ya desde el inicio rompieron con la CUT y con el gobierno de Lula, debido a la propuesta de reforma de la seguridad social, que preveía la contribución de los inactivos del sector público, establecimiento de la edad mínima para la jubilación y de un techo salarial, entre otros, puntos que fueron clasificados y combatidos por estos sectores como neoliberales.

Vía Campesina mantuvo una relación bastante crítica con el gobierno de Lula. Desde el inicio criticó la timidez de la propuesta de reforma agraria, incluso contestando los números oficiales de posesionarios. El MST fue el principal impulsor de esta posición. Los cuestionamientos que dirigieron los movimientos campesinos a la gestión de Lula no se restringieron al asunto de la reforma agraria. Vía Campesina de Brasil, no únicamente a través del MST sino también de actores como el *Movimento dos Atingidos das Barragens (MAB)*¹⁵, se opone a grandes obras que preparó el gobierno para el bosque amazónica, como hidroeléctricas y carreteras. El proceso de liberación de los transgénicos fue también motivo de discordia y distanciamiento de los movimientos rurales con el gobierno del PT. A pesar de este conjunto de divergencias, en momentos en que se confrontaron las fuerzas políticas representadas por Lula, y aquellas que defienden el neoliberalismo, las entidades de Vía Campesina no dudaron en apoyar al campo progresista. Esta postura se evidenció en la crisis política de 2005, cuando el presidente Lula fue perseguido por graves denuncias de corrupción. Mientras los partidos de derecha discutían sobre la posibilidad de hacerle una impugnación a Lula, los movimientos sociales brasileños, incluido el MST, fueron a las calles a defender su permanencia en el cargo. En las elecciones de 2006 y 2010, los movimientos campesinos declararon su apoyo a los candidatos del PT.

En Argentina no existe ningún sector expresivo que clasifique al gobierno de neoliberal. El debate estratégico por lo tanto, no se da respecto al carácter anti neoliberal de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, sino sobre cual es la relación que debe tener la izquierda con el pasado peronista. Es este sentido existe una divergencia central al interior del movimiento sindical. La principal y más tradicional central sindical del país, la Central General de los Trabajadores (CGT), mantiene un vínculo histórico con el peronismo y es una de las principales bases de sustentación de los gobiernos Kirchner. La CGT no hace ningún tipo de crítica al gobierno. La política de la CGT se vio favorecida por el proceso de reconstrucción económica que la pareja Kirchner puso en marcha, con un promedio del 9% de crecimiento del PIB después del auge de la crisis económica, entre 2001 y 2003, cuando el país alcanzó niveles inéditos de pobreza. Incluso así, los indicadores sociales de Argentina aún no regresaron a los niveles de la década de 1990.

15 Movimiento de los Afectados por las Represas

Existe otra central importante, la Central de los Trabajadores de Argentina –CTA–, fundada durante la crisis de 2001 y que organiza a los trabajadores desempleados y a los funcionarios públicos, como los profesores. La CTA mantiene una posición crítica a los gobiernos Kirchner, incluso porque el gobierno cierra las puertas al diálogo, manteniendo como interlocutora solamente a la CGT y vetando la posibilidad de reconocimiento legal de la CTA. A pesar de ello, la posición de la CTA es apoyar las iniciativas consideradas positivas, como los aumentos salariales para jubilados y las políticas de derechos humanos.

La centralidad que adquirió la pauta de los derechos humanos en la gestión de los Kirchner, fortaleció la identidad con los movimientos de izquierda. Los crímenes de la dictadura militar son denunciados; generales y jefes de los servicios de tortura son juzgados; los archivos son abiertos y con ello los movimientos de lucha por los derechos humanos defienden al gobierno, a pesar del peronismo.

En Uruguay los movimientos sociales apoyan al Frente Amplio. Las divergencias existen, pero están encauzadas internamente. El centro del debate estratégico está en el ritmo con que es implementada la agenda pos neoliberal. Los desacuerdos se dan respecto al carácter y a la intensidad de las políticas públicas dirigidas a superar el neoliberalismo. Son raros los momentos en que no se resuelven estas disputas dentro del bloque gobiernista, como en el caso del veto del ex presidente Tabaré Vázquez a la legalización del aborto o en el caso de la ley de caducidad (que habría permitido al Estado juzgar y castigar los crímenes cometidos por los militares en el período dictatorial), que fue derrotada en un plebiscito oficial realizado junto con las elecciones nacionales. Según los activistas de derechos humanos y también de acuerdo con el diagnóstico del movimiento sindical, los candidatos del Frente Amplio priorizaron el debate electoral y no dieron importancia al plebiscito, por lo que la propuesta fue derrotada.

Finalmente, el segundo conjunto de países, que forman parte del ALBA –Venezuela, Bolivia y Ecuador–, comparten un cuadro similar. Se trata de tres naciones en las cuales el neoliberalismo dejó como legado sociedades nacionales totalmente destruidas por la pobreza y por la falta de perspectivas. Todas ellas fueron palcos de grandes movilizaciones populares violentas de repudio a las élites, siendo la primera el Caracazo de Venezuela en 1989, que expresaba la destrucción de la sociabilidad y de la institucionalidad neoliberal que organizaban Venezuela, Bolivia y Ecuador. En el contexto de contestar la total desagregación de su modo de vida, el movimiento popular ecuatoriano derrocó a cuatro presidentes en cuatro años y las luchadoras y los luchadores bolivianos paralizaron el país en la guerra del agua en el 2000.

En esos países las victorias de las izquierdas adquirieron un carácter de refundación nacional, fenómeno que no se observó en los países del Mercosur. Esto explica el por qué sus gobiernos progresistas construyeron su salida del modelo neoliberal por la vía de las Asambleas Constituyentes y la radicalización de la participación popular y de polarización con las élites. No había un debate estratégico respecto a aceptar los lími-

tes de la institucionalidad vigente, y esto se debió simplemente a que estas instituciones se derrumbaron junto con el neoliberalismo. Nacionalizaciones y estatizaciones, adopción de mecanismos de democracia directa, relaciones internacionales dirigidas a embestir a los Estados Unidos, fueron medidas adoptadas por estos tres países, de forma a construir alternativas anti neoliberales que apuntan a un movimiento anti capitalista.

Esto no impidió que surgieran otros tipos de contradicciones. La principal de ellas es la falta de diálogo de los presidentes con los movimientos sociales, provocada sea a partir de la identidad de lucha contra las élites (“o está conmigo o está contra mí”), por la poca tradición de los movimientos sociales, o por la inexperiencia de estos sectores con la máquina pública y la dinámica democrática de lo contradictorio. Para los países del ALBA no existe ningún movimiento popular que cuestione el carácter íntegro de estos gobiernos en relación a la constitución de una agenda pos neoliberal; la discrepancia radica en el diagnóstico de que esta superación, para consolidarse, necesita garantizar la libertad y autonomía de los movimientos sociales.

El caso de Venezuela es el más emblemático, pues añade otras causas a las tres descritas anteriormente. Los cuadros que ocuparon el Estado a partir de 1998 no poseían ninguna experiencia de este tipo. De las tres naciones, Venezuela es la que posee menor tradición de movimiento social organizado. No existe ninguna organización venezolana similar a las grandes organizaciones indígenas de Bolivia y Ecuador. La principal base de apoyo a Chávez son los pobres desorganizados que se beneficiaron con las políticas sociales de su gobierno. Estos sectores están en proceso de creciente organización, incluso porque esto es necesario para enfrentar a los embates de la derecha, en un país tan polarizado. Sin embargo, la ausencia de tradición organizativa hace que los vínculos de estos movimientos con el Estado sean más directos, sin mediaciones. A eso se suman las propias concepciones del presidente, un ex militar con poca cultura democrática. Un ejemplo de ello es la forma como Chávez impuso a sus seguidores la afiliación al Partido Socialista Unificado de Venezuela, bajo el concepto de que quien se quede por fuera, sería enemigo de la revolución. Existe también la poca legitimidad que Chávez confiere a los temas de la autonomía y libertad sindical, lo que genera fuertes críticas de parte del movimiento sindical, a pesar de lo cual apoyan al presidente en los momentos de embate contra la derecha neoliberal.

Bolivia se coloca en el otro extremo ya que posee entidades y movimientos sociales con historia de más de una década, conformadas incluso antes de la elección de Evo Morales en 2003. El propio Evo se constituyó en líder popular, sindical e indígena y con eso construyó su trayectoria política, con un proceso similar al de Lula en Brasil. El Movimiento al Socialismo (MAS) representa un amplio y significativo conjunto de movimientos sociales y sindicales, similar a lo que ocurre en el caso brasileño. Al inicio del gobierno se produjo una división fundamental entre los movimientos sociales. Los movimientos indígenas eran el principal sector de la base de sustentación del gobierno, mediante el apoyo total a Evo Morales, a la par que han visto atendidas muchas de

sus demandas. Ya el movimiento sindical presionó al gobierno para conquistar la libertad, autonomía y reconocimiento de las entidades sindicales y no tuvo éxito frente a la intransigencia del presidente de tratar estos temas.

La situación cambió recientemente con la polémica propuesta de construir una carretera que atravesaría una importante reserva indígena boliviana. Los movimientos indígenas se opusieron y el presidente Evo Morales mantuvo la propuesta, lo que generó críticas y un distanciamiento de su base tradicional. Cuatro ministros pusieron la renuncia, las entidades representativas de los pueblos originarios de Bolivia hicieron una marcha nacional y un campamento en La Paz, boicotearon la elección directa para la justicia, y consiguieron finalmente que el gobierno retrocediera. Pero no es posible prever cuán profundas serán las cicatrices políticas de esta disputa.

Ecuador vive en una situación que mezcla elementos presentes en Venezuela y Bolivia. Rafael Correa se sustenta fundamentalmente en los más pobres y desorganizados, pero no porque no existan organizaciones fuertes y representativas del movimiento social, sino porque ellas combaten muchas de las acciones del gobierno. La Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador (CONAIE) se opone al uso de los recursos naturales como el petróleo, y constantemente entra en la ruta de enfrentar a Correa. Los movimientos sindicales del Ecuador presionaron por la autonomía y la libertad sindical. La situación se radicalizó y la confrontación del inicio del año entre la policía en huelga y el gobierno de Correa, hizo que este acusara de golpistas y enemigos del pueblo a parte de los sindicalistas. A pesar de ello, la mayoría del sindicalismo continúa apoyando a Correa contra las élites neoliberales.

El cuadro de divergencias entre los propios movimientos sociales y de ellos con sus gobiernos, creó dificultades para que las entidades populares construyeran pautas y agendas comunes. Si no hay consenso sobre la caracterización de algún gobierno como neoliberal, no habrá unidad para resistir al neoliberalismo. Más que eso, cada movimiento tiene sus prioridades en la agenda neoliberal, y algunos son atendidos de forma más directa que otros. Estos ritmos dificultan el debate estratégico vital para la unidad de los movimientos sociales, del mismo modo que la caracterización sobre el carácter neoliberal o no de los nuevos gobiernos progresistas.

Los resultados económicos virtuosos de los países de América del Sur es un elemento que complica aún más la construcción de la unidad los movimientos sociales. Con el crecimiento del PIB, la disminución de la miseria, el desempleo en disminución, aumento salarial real de la mayoría de las categorías, la movilización de la base social de estos movimientos se vuelve más cara. Como elemento que dificulta aún más la organización de una agenda común, se anota la polarización política y electoral contra los sectores de la élite que dieron sustento al modelo neoliberal, favoreciendo así un clima de unidad solamente para evitar el retorno de la derecha. Los gobiernos trabajan con eso a fin de evitar ser criticados, para impedir que los movimientos se movilicen para presionar por asuntos estratégicos para todos ellos. De hecho, las agendas unitarias se vol-

vieron escasas a partir del 2005. Muchos movimientos sociales debaten el agotamiento del modelo del FSM, por no elaborar propuestas concretas. Campañas unitarias como la del ALCA tienen cada vez menos visibilidad. Las Cúpulas de los Pueblos no son realizadas con regularidad. El Grito de los Excluidos y el Grito Continental movilizan menos activistas que en la década de 1990.

La centralidad de Brasil en las disputas políticas ambientales

Cómo enfrentar estas dificultades y organizar una movilización conjunta a fin de presionar a los gobiernos para que rompan con el problema y encaminen propuestas concretas de superación de la crisis ambiental ya en la Río+20? Algunas de las respuestas constan en el contenido de las propuestas que los movimientos sociales están elaborando para la Río+20 y que serán analizadas en la próxima sección de este artículo. Sin embargo, existe una segunda dimensión coyuntural que prepara la forma como estas medidas serán encaminadas tanto en las redes de la sociedad civil como en la relación de estas con los gobiernos. Se trata de la centralidad que Brasil adquiere en las disputas sobre las políticas ambientales en el ámbito internacional. Esto repercute en los movimientos sociales brasileños, que pasan a tener una importancia decisiva para que la unidad de la sociedad civil se materialice en una agenda común de movilizaciones. Es común el papel fundamental que juega la sociedad civil de los países sede de las cúpulas de la ONU. Ellas son las que preparan los foros, proponen agendas, etc. Sin embargo, en el proceso de movilización de la Río+20 este aspecto ganó aún más importancia debido al peso del Brasil en las negociaciones ambientales.

Uno de los resultados más íntegros del gobierno de Lula en el camino de elaborar una agenda pos neoliberal se dio en la esfera de las relaciones internacionales. Brasil tuvo a partir de 2003, una política externa independiente de las grandes potencias, en especial de los Estados Unidos, habiendo manifestado su oposición a las intervenciones militares de los Estados Unidos en Irak y al discurso belicista en relación a Irán. Brasil fue decisivo también para enterrar la propuesta norteamericana del ALCA, mediante el fortalecimiento del MERCOSUR, incluyendo la invitación para que Venezuela ingrese al bloque, y la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas –UNASUR–. En la esfera regional, Brasil aportó recursos para Paraguay, mediante la renegociación del tratado de Itaipu y mantuvo las inversiones en Bolivia después de la nacionalización de las reservas de gas y petróleo en manos de Petrobrás.

En el plano del comercio internacional, la diplomacia brasileña organizó un bloque de países en desarrollo en el ámbito de la OMC para evitar que se concretice la liberalización del comercio internacional, favoreciendo apenas los intereses de los países desarrollados. A estas articulaciones en la OMC se unieron las alianzas estratégicas y las cooperaciones que estableció Brasil con otras naciones en desarrollo, formando grupos con Rusia, China, India y África del Sur (BRICs y IBSA) para incrementar los intercambios comerciales y las relaciones políticas, además de establecer nuevos polos de poder inter-

nacional. En el horizonte de estos países está incluso el abandono del dólar como moneda de referencia en el comercio entre ellos, a fin de fortalecer las monedas locales.

El nuevo ciclo de crecimiento económico brasileño posibilitó que el país se relacione de forma inédita con las instituciones multilaterales responsables por la globalización económica. El caso más significativo es la nueva situación de Brasil al interior del Fondo Monetario Internacional, pasando de ser un país deudor a ser país acreedor del FMI. En el contexto de la crisis económica internacional en 2008, Brasil defendió y conquistó la constitución del G-20 (grupo de países desarrollados y en desarrollo) para buscar soluciones a la recesión, sin que se continúe aceptando la legitimidad exclusiva del grupo de los países más ricos, el G7.

Como último ejemplo del nuevo papel desempeñado por Brasil en el plano internacional, se requiere registrar que la diplomacia brasileña intensificó la disputa por la reorganización de la ONU y la adecuación de su Consejo, para adecuarse a la nueva realidad multipolar, con Brasil reivindicando un lugar permanente. De hecho, cada vez más las naciones están de acuerdo con la reforma de la ONU y la demanda brasileña por un cupo en el Consejo de Seguridad, y por eso también el país se comprometió de manera inédita con la comunidad internacional a liderar la misión de la ONU en Haití desde 2004.

Este protagonismo brasileño en las negociaciones internacionales es confirmado y renovado en las discusiones sobre medioambiente y ninguna otra nación sudamericana puede igualar este rol. El país posee una de las matrices energéticas más limpias entre los países en desarrollo y sin que exista un modelo similar en los países desarrollados. Además, la mayor extensión de bosque tropical del mundo se encuentra en el territorio brasileño, así como las mayores reservas de agua dulce. Año tras año, Brasil está mejorando su desempeño en el combate al hambre y a la deforestación de la Amazonía, y por ese motivo presentó osadas metas de corte de emisiones de carbono en la COP-15.

De esta forma, cualquier demanda de los movimientos sociales tiene más posibilidad de suceso si fuera respaldado por el gobierno brasileño. Este, obviamente, tiene más relación con la sociedad civil de Brasil. Ello se debe no únicamente a la geografía y si a la relación histórica que establecieron los movimientos sociales con el Partido de los Trabajadores, y que fue confirmada en el gobierno de Lula en diversas mesas de diálogo con ministros e incluso con el propio presidente.

La actual crisis económica internacional favorece aún más la centralidad de Brasil y de los movimientos sociales brasileños en la Río+20. La mayoría de los países desarrollados está involucrada en una agenda interna de fuerte recesión y desempleo, y con movilizaciones populares que dificultan el involucramiento en asuntos internacionales controversiales. Además, la crisis trae dificultades adicionales de financiamiento para los actores de la sociedad civil de otros países, más allá de los límites financieros cotidianos de entidades y movimientos que no siempre cuentan con el apoyo estatal.

Finalmente, existen las propias dificultades inherentes a las formas organizativas de cada movimiento u organización en particular. Greenpace, por ejemplo, no posee una coordinación sudamericana, lo que hace que la responsabilidad de dirigir la intervención colectiva de la entidad esté vinculada directamente a la sección brasileña. Las redes de organizaciones no gubernamentales también concentran las tareas en entidades brasileñas, como la FASE. Respecto al movimiento sindical –que está desempeñando un papel importante en el debate de la crisis ambiental–, no hay en América del Sur otra central sindical con la capacidad política y organizativa de elaborar e irradiar posiciones sobre el tema, como la CUT. Por otro lado, los movimientos vinculados al sector campesino e indígena, enfrentan en este momento una coyuntura difícil en Bolivia y en Ecuador, donde son fuertes. Diversos enfrentamientos con los gobiernos progresistas de Evo Morales y Rafael Correa, concentran las energías del MAS y de la CONAIE en la agenda interna, lo que aumenta la responsabilidad del MST y de los otros movimientos brasileños de Vía Campesina, de colocar la pauta del debate y organizar la intervención.

Por ello, es inevitable que este artículo se concentre en los movimientos sociales brasileños. Es difícil plantear una articulación sudamericana de los movimientos sociales en el escenario coyuntural descrito anteriormente. Esta unidad de la sociedad civil de América del Sur tiende a materializarse de forma más definitiva en el propio evento de la Río+20, cuando los movimientos sociales estarán realizando la 5ª Cúpula de los Pueblos de las Américas.

4. Los dos campos de los movimientos sociales sobre la Río+20

El análisis de las posiciones de los movimientos sociales en este artículo se dará a partir de la discusión respecto a algunos conceptos clave, como desarrollo, economía verde, modelo de producción y consumo, transición justa. A partir de estas nociones esas posiciones se conformarán y es a través de ellas que podrá ser construida la unidad de esos movimientos. Y, al encontrarnos con las formulaciones de los movimientos sociales sobre la Río+20, dos son las alternativas que se presentan. Por un lado existen los actores de la sociedad civil cuya actuación se basa en una visión estratégica de que es posible construir una alternativa a la crisis ambiental dentro de los actuales marcos políticos e institucionales. En ese caso está el movimiento sindical liderado por la CUT, las organizaciones no gubernamentales agrupadas alrededor de la REBRIP y también la Vitae Civilis y el FBOMS, así como los sectores de juventud de estas entidades y la red del movimiento estudiantil que agrupa la OCLAE, la UNE y la UBES.

La CUT lidera este grupo porque es la central sindical más grande de América Latina y la que está más involucrada con el tema de la crisis ambiental y con la búsqueda de soluciones que no perjudiquen a los trabajadores desde la Eco-92. Así, la CUT formula las posiciones más consistentes en lo que se relaciona al contenido, y las más avanzadas en lo que se refiere a una solución de la crisis a partir de la construcción de otro modelo de desarrollo. La central cuenta también con el acumulado colectivo del movimiento sindical internacional, que es significativo y al que ella misma contribuyó de forma decisiva al orientar y organizar su intervención en la Río+20¹⁶. Hay también la propia característica negociadora que es inherente al sindicalismo y también la necesidad de que los sindicatos tienen que buscar aliados estratégicos en esta lucha, debido a que otros actores y movimientos sociales tienen acumulaciones importantes y distintas para el área ambiental. Además, es importante recuperar que los sindicalistas latinoamericanos cuentan con un “escenario progresista en buena parte de los gobiernos de la región”, y que este contexto “podría ser aprovechado para una intervención sindical activa que implique un planteo diferente del desarrollo con empleos sustentables y justicia social y ambiental”¹⁷.

16 Sobre el historial de intervención de la CSI en los debates del medioambiente, ver Llanos y Maffei (2010), p. 12-14. En relación a la memoria de la actuación de la CSA en este tema ver los mismos autores, p- 16-18.

17 Llanos y Maffei, 2010, p. 6.

El segundo campo puede ser llamado de crítica sistémica. Los movimientos sociales creen que dentro del capitalismo es imposible resolver la crisis ambiental, dado que estructuralmente busca el lucro, sin importar el costo social y ambiental. Por ello es necesario un cambio estructural y radical en los modelos de consumo y producción. La Vía Campesina, la Marcha Mundial de las Mujeres, las entidades indígenas y ONGs importantes como la FASE, el grupo de apoyo y reflexión del FSM y el Jubileo son actores que impulsan esta segunda posición. Estos movimientos rechazan el concepto de economía verde, por estar vinculado a las grandes empresas, que toman iniciativas paliativas para aumentar el lucro. Para ellos, las actuales salidas, con base en la discusión del desarrollo sustentable, alimentan la lógica del mercado y el actual modelo de producción y consumo. Por lo tanto, son propuestas capitalistas que no hacen sino agravar la crisis ambiental.

Estos movimientos se relacionan de forma aún más orgánica con los países que forman parte de la ALBA y critican la postura de algunos gobiernos progresistas de América del Sur que estarían reproduciendo el modelo de desarrollo de las grandes potencias capitalistas. Son especialmente contrarios a las grandes obras de infraestructura y la producción de energía limpia a través de la agricultura, alegando que esto amenaza la seguridad alimentaria de los pueblos, pues utiliza tierras que podrían estar produciendo alimentos, provocando escasez, inflación y hambre. Los actores adeptos a la crítica sistemática aceptan la noción de transición para orientar su intervención en las cúpulas de la ONU porque tienen consciencia de que un cambio total en el sistema capitalista no está en el orden del día. Sin embargo, la intervención en estos foros está orientada por el diagnóstico de que la parálisis es el único resultado posible dentro del sistema capitalista. En este sentido, no son favorables a las negociaciones paliativas con los gobiernos e invierten en formas innovadoras de organización social, política y económica, surgidas al interior de la sociedad civil.

No hay diferencia entre los actores que adoptan la posición de negociación por la vía multilateral en relación al diagnóstico típico de la crisis sistémica relativa a que la crisis ambiental es consecuencia del modo de producción capitalista. Lo que diferencia a estas entidades de aquellas clasificadas en la segunda posición es la visión estratégica de que es posible negociar la transición por medio de los foros de la ONU. En este proceso de negociación, este grupo de organizaciones parte de una visión crítica del concepto de desarrollo sustentable, afirmando que es necesario incluir conjuntamente criterios sociales y ambientales, rechazando propuestas que conduzcan al desempleo y a la disminución de las redes de protección social. En este momento esas entidades insertan el concepto de *Transición Justa*: Para cambiar el modelo energético, por ejemplo, es necesario emplear al conjunto de los trabajadores vinculados a las fuentes no renovables, como el petróleo, en otras áreas, y con eso no generar desempleo. En relación al concepto de economía verde, esos movimientos admiten la posibilidad de discutir su contenido, sin rechazarlo o aceptarlo de forma inmediata. Las entidades que defienden las negociaciones sostienen que el nuevo ciclo de desarrollo económico de países como Brasil, China e India puede tener un compromiso ambiental de la misma forma

que ya asimiló la pauta social. Nuevamente el concepto de transición es clave para el entendimiento de que es posible construir el cambio de los modelos de consumo y producción en alianza con los gobiernos progresistas de América del Sur y con las naciones en desarrollo.

Antes del estudio de estas posiciones alternativas de los movimientos sociales del campo anticapitalista, es necesario resaltar que ellas no son estáticas. Dentro de estas agrupaciones existen diferencias fundamentales entre las organizaciones. Existen aquellas entidades que colocan al tema del ambiente en el centro de su intervención, y otras que van a tomar posición sobre la Río+20 apenas en la víspera de la cúpula. Entre las organizaciones que abordan la cuestión ambiental de manera transversal, como una manera de reforzar sus pautas (por ejemplo, seguridad alimentaria) y aquellas que priorizan el tema ambiental para denunciar al capitalismo, existen otras que hicieron una conexión estratégica entre su demanda original, el trabajo por ejemplo, y el medioambiente.

A pesar de esta diversidad, todos los movimientos sociales citados presentan una enorme disposición de intervenir de manera unitaria en los debates de la Río+20 porque se entiende que, sólo de esta forma pueden influenciar en sus resultados. Las divergencias estratégicas que marcaron el último período –y que fueron presentadas en la segunda sección– pueden ser dejados de lado, según la opinión de los actores de la sociedad civil, a fin de favorecer la construcción de un objetivo común que es la superación de la crisis ambiental de la Tierra, del mismo modo que la lucha contra el neoliberalismo favoreció las convergencias en los años 1990 e inicio de los años 2000.

En este sentido, esos movimientos decidieron realizar paralelamente a la Río+20 la Cúpula de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental, evento anticapitalista y de movilización popular que pretende denunciar los límites de los foros internacionales y de las soluciones de mercado. Al mismo tiempo convocan a la sociedad civil brasileña e internacional para que presionen a los gobiernos a fin de pactar otro modelo de desarrollo. La Cúpula de los Pueblos va a ser organizada por un grupo de trabajo compuesto por los movimientos sociales, llamado Comité Facilitador de la Río+20, que tiene como tarea organizar política y estructuralmente el evento. Los movimientos priorizados en este artículo en su mayoría son aquellos que actúan en este comité y por lo tanto representan a la diversidad de actores sociales involucrados en el proceso de la Río+20.

El movimiento sindical y la transición justa

La exposición de los movimientos sociales se iniciará por el sindicalismo. Identificamos que finalmente el movimiento sindical ha demostrado un protagonismo significativo en las movilizaciones de la sociedad civil organizada a fin de intervenir en los procesos de discusión sobre medioambiente en el ámbito de la ONU, y en especial en la Río+20. Según las palabras de Llanos y Maffei,

Para el movimiento sindical de América Latina, la agenda ambiental se vuelve un tema inevitable. Cuando el sindicalismo hace propuestas para el desarrollo de la región, debe enfrentar el reto de incorporar la variable ambiental a sus demandas y propuestas. (...). (p.6).

Este protagonismo de los sindicalistas dio como resultado un diagnóstico bastante profundo sobre el tema, así como la elaboración de propuestas calificadas para superar la crisis ambiental sin perjudicar a los trabajadores. El proyecto defendido por los sindicalistas tiene el mérito de haber conectado de forma orgánica el tema del trabajo con el de medioambiente en un concepto de desarrollo que supera los límites teóricos y prácticos que el desarrollo vivió a lo largo del siglo XX.

El movimiento sindical interviene en la ONU a través de la Confederación Sindical de los Trabajadores (CST). Para los propósitos de este artículo sirve estudiar también la Confederación Sindical de Trabajadores de América (CSA), que forma parte de la red que forma la CSI. A pesar de ello, como ya fue explicado, concentraremos la atención en la CUT. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo de Brasil, la CUT conforma el mayor índice de representatividad, entre las centrales de ese país, con el 38,23%. Luego está la Fuerza Sindical, con el 13,71%; la CTB, con 7,55%; la UGT, con 7,19%; la NCST, con 6,69%; y la CGTB, con 5,04%. El tamaño con seguridad influye en el liderazgo de la CUT, pero este no es el motivo más importante. El movimiento *cutista* desde su fundación en 1983, ha desarrollado acciones políticas, a fin de movilizar a la sociedad civil en torno a los problemas ambientales. Esas discusiones ganaron institucionalidad a partir de 1991, cuando fue aprobada en congreso nacional la creación de la Comisión Nacional de Medio Ambiente. En el 10^{mo} congreso de la CUT en 2009, fue creada la Secretaría Nacional de Medio Ambiente.

El liderazgo nacional de la CUT en temas ambientales puede ser verificado a partir de la comparación de los documentos de posición de esa organización y del conjunto de las centrales sindicales brasileñas que sería llevado a la CSI para ser presentada en la Conferencia de Copenhague, en 2009: los dos documentos son rigurosamente iguales. El de la CUT fue presentado en septiembre de 2009 con el título "Propuestas de la CUT sobre la Cuestión Climática, preparatoria para la Conferencia de Copenhague" y el documento de las otras centrales es de octubre de 2009.

El documento de la CUT no deja lugar a dudas respecto a que el capitalismo es el responsable de la crisis ambiental que aqueja a la humanidad, haciendo un análisis similar al de la Vía y de la MMM. Para la CUT, "los problemas asociados a los cambios climáticos son el resultado de un modo de producción, distribución consumo basado en la sobreexplotación de los recursos naturales y en la privatización de su acceso".

Una primera consecuencia de este diagnóstico es el rechazo que presentan los sindicalistas en relación a las soluciones de mercado, del mismo modo que los movimientos de crítica anti sistémica. Para todas esas organizaciones populares, tales soluciones en

realidad buscan el lucro capitalista y tiene como resultado la profundización de la crisis y no su solución. Otro elemento importante es que la CUT, a pesar de que reconoce que los países desarrollados son los grandes responsables de la polución y del desgaste de los recursos naturales y deben comprometerse de manera más efectiva con las medidas que solucionen la crisis, no exime a los países en desarrollo como Brasil, de adoptar medidas mitigadoras de los problemas ambientales. La excepción que hace la central brasileña es que éstas no deben tener como consecuencia la inviabilización del desarrollo de esos países, lo que va a diferenciar su posición de la de los actores agrupados alrededor de la crítica sistémica, que critican la noción de desarrollo en auge en los países de América del Sur.

Esta discrepancia no impide la unidad política de los movimientos sociales porque, debido al diagnóstico de la CUT respecto al papel del capitalismo en la crisis y la no aceptación de las soluciones mercadológicas, se manifiesta una segunda consecuencia de índole práctica. Ésta se expresa en la defensa que hace la CUT de que Brasil y la ONU apoyen la propuesta boliviana de “Deuda Ecológica”, misma que consiste en una serie de compromisos a ser adoptados por los países más desarrollados hasta 2017 y que servirán para compensar el hecho de que las naciones desarrolladas son las grandes responsables por la crisis climática.

La CUT tiene como pilar el acumulado colectivo del movimiento sindical internacional, al que ella contribuyó decisivamente. Las semejanzas entre el documento de la CUT para la COP-15 y aquel elaborado por la CSI son muchas. Además, se puede destacar del diagnóstico, que la crisis ambiental es el resultado del capitalismo, la noción de *transición justa*, que parte de la objeción a las soluciones de mercado como método principal de solucionar esta crisis y que será garantizada con la creación de tasas sobre el capital financiero y sobre los sectores más contaminantes que financiarán la ampliación de las redes de protección social, la promoción de empleo verde como trabajo decente.

También son muy cercanas las formulaciones de la CUT y las concepciones acumuladas por la CSA en su II Conferencia Sindical “Trabajo y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe”, realizada en Buenos Aires en el mes de mayo de 2009. Además de lo que hay de común con la CSI, se destaca el derecho al desarrollo económico por parte de los países de América Latina sabiendo que este solo será posible si se basa en nuevos modelos de producción y consumo sustentables, al contrario del desarrollo que reguló Europa, Estados Unidos y Japón.

Conociendo las relaciones orgánicas que tiene la CUT con la CSI-CSA y del protagonismo de esta central en la construcción del posicionamiento del sindicalismo internacional, el presente artículo concluirá este análisis a partir del documento *El diálogo de Madrid. Economía Verde y Trabajo Decente: Un nuevo paradigma para el empleo, la inclusión social y la erradicación de la pobreza en un planeta sostenible*. Elaborado el 2011, busca la movilización para la Río+20, y es resultado de las articulaciones de la

CSI con otros movimientos sociales y con la ONU, y repercute en gran parte de las formulaciones de la CUT. En los “Diálogos”, el concepto que articula la crítica al capitalismo como responsable de la crisis ambiental con la estrategia de conquistar cambios efectivos por el camino de la ONU es el de *transición justa*, y que se debe basar en

políticas activas para el mercado laboral, en la protección del ingreso, la recalificación, la sensibilización y el fortalecimiento de las capacidades de los empleadores y los sindicatos, y las inversiones en el ámbito local para diversificar la economía y crear oportunidades alternativas de ingreso. (p. 10)

El punto central es evitar que las políticas públicas que construirán la economía verde sean perjudiciales a la mayoría de la población trabajadora, con disminución de empleos y recortes en la red de protección social a los más pobres. Las otras propuestas del movimiento sindical son formas de concretar lo que sería esta *transición justa*. Así, empleo verde no es apenas aquel que reduce los impactos ambientales de las empresas y los sectores económicos hasta niveles sostenibles”, sino también aquel que no perjudica a la clase trabajadora sino que “que provee condiciones de vida y trabajo decentes para todos los involucrados en la producción y garantiza el respeto de los derechos laborales y de los trabajadores”¹⁸. Los empleos verdes deben diferenciarse fundamentalmente de los puestos de trabajo tradicionales en el sentido que promueven justicia social juntamente con el respeto ambiental, esto es, deben configurarse como trabajo decente, lo que significa que

El trabajo decente se puntualiza según la definición adoptada por la OIT, que indica que los empleos tienen que ofrecer a hombres y mujeres la oportunidad de obtener un trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en los que sus derechos estén protegidos y obtengan una remuneración suficiente y protección social. (p. 10).

El movimiento sindical presenta como propuesta central una reforma tributaria mundial que financie la *transición justa* basada en la recaudación de impuestos de las transacciones financieras y de las actividades contaminantes en la cobranza de impuestos de las transacciones financieras y de las actividades contaminantes en todo el planeta. La constitución de políticas fiscales en ámbito internacional que se basen en el principio de redistribución de la riqueza “son necesarias para revertir las tendencias a largo plazo hacia una creciente desigualdad, para facilitar la transición hacia una economía verde y para restaurar el financiamiento adecuado de la protección social.”¹⁹

El presidente de la CUT, Arthur Henrique, publicó un artículo en la página de la Central, en el cual intentó sintetizar estas posiciones defendiendo “la creación de una tasa de transacciones financieras internacionales, ampliación de los sistemas de protección social y garantía de los mismos y metas de creación de empleos verdes en base al trabajo decente”. Además, él penetra en la difícil tarea de la construcción política nece-

18 “El diálogo de Madrid”, p.9

19 Diálogo de Madrid, p.4.

saría para que tales propuestas se hagan efectivas. Por eso realiza algunas preguntas que deben llevar de forma unificada los movimientos sociales, a fin de que los gobernantes presenten en la Río+20:

¿Cuáles reglas tendremos para medir las demandas de redistribución de renta y de riqueza que deberán ser hechas en ese reordenamiento mundial? ¿Cómo evaluar la relación producción/consumo/distribución, al interior de cada país y entre países? ¿Cómo esas condicionalidades se van a acomodar al interior de cada país? ¿Cuáles son los planes en gestación? ¿Cuáles las metas y métodos? Considerando el sentido de urgencia dado por la dimensión de la crisis actual, cuáles plazos serán establecidos para la presentación de planes que permitan que la Conferencia Río+20 sea efectivamente inductora de políticas que favorezcan la salida de la crisis, en la perspectiva de un nuevo modelo de desarrollo?²⁰

En resumen, parece claro que la CUT y el movimiento sindical internacional, de hecho articulan una posición capaz de unificar el conjunto de movimientos sociales, reconciliándose con la posición de la crítica sistémica. Articulan una estrategia que presenta la visión crítica del actual período de desarrollo capitalista mundial y también los obstáculos en las negociaciones entre los gobiernos con disposición a tratar, así como propuestas concretas que pueden contribuir en el sentido de superar tales obstáculos. En palabras de Llanos y Maffei, queda clara la importancia que el movimiento sindical puede cumplir en las movilizaciones sociales y en las negociaciones de la Río+20:

Los sindicatos tienen mucho que aportar en la articulación de estrategias y la construcción de alternativas, dado que saben enfrentar desafíos, gestionar conflictos y construir consensos. Los sindicatos tienen, además, capilaridad y capacidad de acción en distintos niveles; conocen de la solidaridad internacional y entre sectores; tienen una amplia experiencia de lucha por la justicia, la igualdad y los derechos sociales. (p. 7-8).

Los movimientos sociales anticapitalistas

Finalizada la exposición del movimiento sindical, llegó el momento de estudiar la posición de la "crítica sistémica", que es defendida por un conjunto expresivo de movimientos sociales tales como Vía Campesina, el movimiento indígena, la Marcha Mundial de las Mujeres y alguna ONG como FASE, que tienen en común el repudio al concepto de economía verde propuesto por la ONU y la estrategia de hacer de las movilizaciones de la sociedad civil un proceso rumbo "a un nuevo paradigma" societario.

Vía Campesina en Brasil está compuesta de diversos movimientos, siendo los más importantes el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST) y el Movimiento de los Afectados por las Represas. La Marcha Mundial de las Mujeres es una articulación en red de feministas anticapitalistas que tiene como uno de sus ejes centrales la lucha por el "bien común y servicios públicos" que son los bienes "compartidos por toda la

²⁰ www.cut.org.br Consultado en: 13/10/2011.

comunidad” y son fundamentales para una “vida digna” tales como educación, salud, información y asuntos relacionados con el medioambiente –acceso al agua, energía, soberanía alimentaria, etc. Finalmente, FASE, una ONG de Brasil que cumple un papel importante en las articulaciones de la sociedad civil para la Río+20.

El centro estratégico de las intervenciones de la Vía en los debates sobre el medioambiente es demostrar que el capitalismo es el responsable del desastre ambiental y que los movimientos de campesinos con su resistencia y formas de relacionarse con la naturaleza elaboran cotidianamente alternativas sistémicas al capital. En este caso se encuentran la agricultura familiar y la agro ecología igualitaria sin explotación.

En el documento elaborado por Vía Campesina para la COP-17, que se llevó a cabo en África del Sur en diciembre de 2011, se encuentra la denuncia respecto a que “la mayoría de gobiernos del mundo, con la notable excepción de Bolivia, se reunieron no para tratar asuntos vinculados con el clima sino para hacer negocios con las corporaciones transnacionales que se dirigen por falsas soluciones respecto a la problemática ambiental”. Para los campesinos, las conferencias de la ONU han sido palco de “ardides” y carnadas por parte de las “potencias capitalistas que pretenden evitar la reducción de sus propias emisiones de gases con efecto invernadero”, como el mercado de carbono y la economía verde.

La Marcha comparte el mismo escepticismo en relación a la capacidad de la ONU de coordinar la negociación de los gobiernos en busca de una solución para la crisis ambiental. Para Tica Moreno, militante de la MMM “mucho se negocia en el ámbito de la COPs, pero poco es implementado. Se gasta mucho dinero en estos encuentros y el mercado continúa “actuando a sus anchas”. Dicen las feministas en su página de internet que los “gobiernos que no quieren enfrentar el modelo de producción y consumo, buscan soluciones paliativas que pueden generar más negocios. Los graves problemas que provoca este sistema de producción se vuelven cada vez más agudos con los cambios del clima²¹”.

Para la MMM, lo más grave es que estos foros multilaterales de la ONU tienen como objetivo elaborar normas sobre cómo los “asuntos nacionales sobre conservación y uso de la biodiversidad sin la efectiva participación de las poblaciones directamente afectadas”. Por eso las militantes de la MMM afirman que se trata de una “violación a la actual forma de ‘consulta’ sobre importantes instrumentos legales y de política concentrada en pocos actores y de cuestionable representatividad”.

El diagnóstico de la FASE sigue el mismo camino. El documento “Río+20 Resistir al ambientalismo de mercado y fortalecer los derechos y la justicia socioambiental”²² es lo que sintetiza la posición de la organización. El diagnóstico que la entidad hace identifica “la impotencia de la ONU” y la “insignificancia del PNUMA”, lo que evidencia “la

21 www.sof.org.br. Consultado el 17/10/11.

22 Extraído del sitio web de la FASE, www.fase.org.br, el 07/07/2011.

incapacidad del actual sistema internacional para enfrentar los desafíos que impone el futuro y para hacer cumplir los acuerdos del ciclo de conferencias desde la Río 92”.

Para la FASE, “ni las Naciones Unidas, ni los gobiernos, aprisionados al pasado, están actuando conforme la gravedad del proceso” de crisis ambiental que amenaza la Tierra. En términos del documento, solamente los movimientos sociales críticos al capitalismo y a los foros multilaterales de la ONU tienen condición de revertir el cuadro:

Las organizaciones de la sociedad civil global, que se vienen reuniendo de forma autónoma en espacios como el Foro Social Mundial y en los procesos y luchas permanentes que vinculan lo local y lo global, en eventos paralelos a las conferencias de las Naciones Unidas, a las reuniones del G20 y de las instituciones financieras multilaterales, y que se reunirán en Río de Janeiro durante la Conferencia de Río+20, están desafiadas a restaurar y continuar la lucha por otro mundo y presionar para que los gobiernos y a las instituciones del sistema internacional actúen de forma efectiva.

La diferencia del diagnóstico de estos tres movimientos en relación a la visión del movimiento sindical sobre el sistema de las Naciones Unidas es patente. En cuanto que FASE, Vía Campesina y MMM no creen en una reversión de este papel nefasto de los foros multilaterales, el documento “Diálogo de Madrid” es fruto del debate entre el movimiento sindical internacional y la ONU, y “las propuestas de la CUT” para la COP-15 tienen como objetivo convencer al gobierno brasileño para que se apropie de algunas de ellas.

Para FASE esta parálisis de la ONU aparece como un hecho estructuralmente lógico y coherente con la responsabilidad que el modo capitalista tiene sobre la crisis ambiental. Las potencias capitalistas son el poder dominante de los foros multilaterales y utilizan estos espacios para defender los intereses del mercado. Para la ONG, desde la ECO 92 en que “los gobiernos presentes y la propia ONU reconocían el poder de la economía capitalista por sobre la política, o mejor, como conductor de la política”.

La MMM camina en el mismo sentido cuando define, en su eje de luchas por el bien común, que “el sistema capitalista se basa en la explotación extrema de la naturaleza y de los recursos naturales, reduciéndolos de simples mercaderías que serán compradas y vendidas por medio de la privatización y control por la fuerza”. O al resaltar que

Las crisis recientes –alimentaria, energética, financiera y ambiental– demostraron el fracaso del modo capitalista de producción y distribución agraria, y demostraron que aquellos que las sienten con más intensidad son los más vulnerables –mujeres, pobres, niños, personas de la tercera edad. Frente a este escenario, las respuestas presentadas por la mayoría de los gobiernos e instituciones multilaterales (ONU, FMI, Banco Mundial) son paliativas, pues defienden fuertemente las soluciones de mercado: alianzas con empresas, aumento del comercio y el fin de las barreras impositivas de importación. En otras palabras, la implementación de las mismas medidas que provocaron el problema.

El manifiesto del MST denominado “Plataforma Política para la Economía Brasileña” también presenta el vínculo entre el capitalismo y la crisis ambiental y sirve para nuestro estudio, a pesar de no haber sido elaborado para las movilizaciones de la Río+20:

El actual modelo agrícola impuesto al Brasil por las fuerzas del capital y de las grandes empresas, es perjudicial a los intereses del pueblo. Él transforma todo en mercadería: alimentos, bienes de la naturaleza (como agua, tierra, biodiversidad y semillas) y se organiza con el único objetivo de aumentar el lucro de las grandes empresas, de las corporaciones transnacionales y de los bancos.

Para el MST, la relación orgánica entre capitalismo y destrucción del ambiente se manifiesta de manera definitiva en el agro negocio, forma más avanzada de producción agrícola capitalista de los latifundistas, quienes “destruyen el ambiente, la biodiversidad, dañan la tierra, generan desempleo, destinado a la producción para la exportación, generando lucro a las transnacionales y dejando para nosotros la degradación social y ambiental”. Los trabajadores sin tierra de Brasil no se limitan a hacer un análisis nacional del proceso de destrucción del ambiente:

Las articulaciones de las empresas transnacionales, falsas entidades ambientalistas y algunos gobiernos del hemisferio Norte quieren transformar al ambiente en simple mercadería. Además de introducir títulos de créditos de carbono negociables en las bolsas de valores –oportunidades de lucro para las empresas del Sur, al paso que continúan libremente las agresiones al ambiente por parte del capital.

Estas palabras demuestran la unidad política de Vía Campesina Internacional y van al encuentro de las declaraciones de Alberto Gómez Flores –representante de Vía Campesina de América del Norte– durante la COP-15: “el espacio de las Naciones Unidas para el cambio climático se transformó en plataforma para legitimar las estrategias de negocios de las transnacionales” con la creación de “nuevas formas para que las empresas transnacionales expandan y consoliden su control sobre el agua, territorios y semillas”. Sin embargo, el documento del MST aquí analizado y aquel de la Vía no tratan de la Río+20, a pesar de que la convocatoria internacional de movilización para la COP-17 trate de las propuestas de la ONU para la crisis climática, el concepto de *economía verde* (central en las formulaciones de la ONU para la Río+20) no aparece.

Los manifiestos y documentos de la Marcha Mundial de las Mujeres tampoco fueron en su conjunto, formuladas especialmente para la Río+20. Sin embargo aquí el concepto de *economía verde* es denunciado por las feministas: “La Río+20 genera y consolida la llamada “economía verde”, que puede significar una apropiación, por parte del capitalismo, de alternativas construidas por la agricultura familiar y campesina y por la economía solidaria, reduciendo la crisis socioambiental a un problema de mercado. Por eso la crítica más contundente y elaborada a esta propuesta vino de parte de FASE:

Frente a la incapacidad de la ONU, por un lado, y del poder de las instituciones multilaterales que sirven a los intereses de las corporaciones, por otro, el resultado es que los

gobiernos y las políticas públicas y democráticas pierden cada vez más espacio para acuerdos y políticas que entregan nuestro futuro a la iniciativa privada y, en su versión más reciente, a la economía verde.

Para la ONG, “el mercado deja su defensa en manos de los gobiernos y de las Naciones Unidas, que mantienen la retórica de los derechos humanos, incluyendo en su campo el derecho al agua; pero, sin medios ni voluntad política para implementarlos”. En verdad, FASE entiende

la “economía verde” como una nueva fase de la economía capitalista. A través del mercado verde, un nuevo ambientalismo, fundado en el *business* verde, propone la asociación entre nuevas tecnologías, soluciones por el mercado y apropiación privada del bien común como solución para la crisis planetaria. Este reciclaje de las formas clásicas de funcionamiento del capitalismo, de sus modos de acumulación y expropiación, se constituye en un grave fraude de consecuencias profundas. Da un nuevo impulso a un modelo inviable y ofrece como utopía solamente la tecnología y la privatización.

Lo peor es que este concepto “impide tomar conciencia de la crisis que enfrentamos y de los verdaderos impases que está viviendo la humanidad. Por ello, impide que sean formuladas nuevas utopías y que sean construidas alternativas civilizatorias”.

La intención de estos movimientos de construir una alternativa civilizatoria al capitalismo hace que rechacen también la noción de desarrollo, y critiquen a algunos gobiernos progresistas de América del Sur que utilizan esta categoría. Para Vía Campesina, la única excepción es Bolivia. O incluso, como afirma FASE,

La ideología del desarrollo, entendido como crecimiento económico que alimenta la expansión de modelos insustentables de producción y consumo, penetró profundamente en el imaginario y en la cultura de todas las clases sociales, en el Norte y en el Sur, orientando incluso la acción de gobiernos elegidos en países del Sur con el mandato de desencadenar transformaciones, pero que, sin embargo, no consiguen construir una nueva correlación de fuerzas capaz de promover cambios y tampoco consiguen acumular reflexión y fuerza política en la dirección de construir nuevos paradigmas.

La MMM denuncia también el paradigma del desarrollo:

En el feminismo hay una vertiente radicalmente crítica al modelo de desarrollo hegemónico, caracterizado por la integración al sistema capitalista y a una sociedad de mercado, por el paradigma de la sustentabilidad de la vida humana entendida como relación dinámica y armónica entre la humanidad y la naturaleza y entre humanos y humanas.

En formulaciones de la MMM encontramos una crítica específica al caso brasileño, que se relaciona con la posición del MST y de la FASE sobre la forma en que la izquierda sudamericana está encerrada en el paradigma occidental de civilización y en el modo de producción capitalista

Al alimentar ese modelo de desarrollo, el gobierno de Dilma inviabiliza la justa prioridad que atribuyó al combate a la miseria en nuestro país. Colocando como eje estructurador al crecimiento económico por la vía de la exportación de *commodities*, ese modelo genera efectos perversos que se difuminan en cadena sobre nuestra sociedad.

Llegamos entonces a un segundo punto de discordia entre la posición de los movimientos de la crisis sistémica y aquella de la CUT. Mientras los sindicalistas defienden el derecho de los países pobres al desarrollo, incluso sobre otras bases, campesinos, feministas y la ONG critican de forma radical esa perspectiva.

De cualquier forma, FASE, Vía Campesina y MMM buscan no transformar en pesimismo esta evaluación sobre la fuerza del capital. Según la propuesta de la ONG, la Río+20 puede ser un importante momento de construcción de alternativas. La crisis económica de 2008 es vista por la FSE como un evento "que revela la quiebra de legitimidad y de sustentación económica, social, ambiental y política de reproducción del modelo vigente". Además, dice que "la crisis abre por ello, brechas de disputa por la democratización del sistema internacional. Las nuevas e inestables coaliciones entre países, que ya no se encuentran cristalizadas en divisiones Norte-Sur, son síntomas de un escenario político global en movimiento". Así

La Río+20 puede ser un importante momento de levantar una nueva correlación de fuerzas y de una nueva agenda global, ofreciendo a los movimientos sociales, organizaciones populares, movimientos de pueblos tradicionales y originarios, sindicatos, entidades de la sociedad civil que reflejan o buscan expresar las ansias de amplios sectores de la población mundial, la oportunidad de renovar su protesta y su cuestionamiento sobre los rumbos dados al futuro del mundo por las corporaciones, instituciones y países dominantes, acompañados por la gran mayoría de las élites políticas y económicas, diseñar sus utopías y formular con mayor consistencia las alternativas que visualizan.

La MMM comparte con sus aliados estratégicos la visión de que la Río+20 puede ser un momento de convergencia de diversas luchas entabladas por los movimientos anticapitalistas en el siglo XXI. Como afirma Tica Moreno, el conjunto de la sociedad civil organizada "tiene una visión crítica en común en lo que respecta a la mercantilización de la vida, la cuestión del control del territorio y de la biodiversidad y la problemática del racismo. Nosotros formamos parte de la naturaleza y por ello es tan central este tema".

La Marcha cita iniciativas actualmente en curso, como ejemplos de que el mundo sin capitalismo es posible. Son experiencias populares que "se fortalecen a partir de la legitimidad de sus prácticas y aprovechando las brechas existentes en la legislación". Ellas citan a los bancos comunitarios a partir de variedades de dominio público; la auto regulación de los conocimientos tradicionales sobre las plantas medicinales del Sotobosque; la constitución de un fondo público de las quebradoras de coco babaçu²³ a través de la distribución de beneficios que reconoce el conocimiento tradicional asociado.

²³ Planta de la familia de las palmáceas, dotada de frutos con semillas oleaginosas y comestibles de las cuales se extrae un aceite, empleado sobretudo en la alimentación, medicinas y está siendo objeto de investigaciones para su incorporación en estudios para la fabricación de biocombustibles. *N. de la T.*

El discurso del representante del MST, Marcelo Durão, en el foro sobre la Cúpula de los Pueblos es emblemático desde la perspectiva de romper con el pesimismo frente a la fuerza del capital y de entender la Río+20 como un momento decisivo de las luchas de los pueblos:

La Río+20 debe ser encarada como un momento clave para formular nuestra posición frente a la sociedad brasileña y frente a la sociedad global, para colocar unitariamente al pueblo en las calles a fin de enviar un mensaje al gran capital de que estamos aquí, resistiendo y luchando por un mundo justo desde la perspectiva social y ambiental.

Para Vía Campesina, el potencial de transformación surge cotidianamente con sus prácticas de “agro ecología y Soberanía Alimentaria” organizadas “desde la base”, paralelamente al proceso de presión sobre los gobiernos y que pueden

Construir una poderosa voz del pequeño propietario y campesino, que estará presente como los otros sectores de la sociedad civil en la COP-17 y en la Río+20, con el mensaje de que estamos contra las falsas soluciones para el cambio climático y exigimos la adopción de los Principios de Cochabamba. Vamos a insistir en que la agricultura sustentable de pequeña escala y la soberanía alimentaria son las soluciones más importantes para el cambio climático.

La necesidad de unidad de los movimientos sociales surge de forma clara en este discurso de Vía Campesina. FASE hace lo mismo al definir la forma en que la sociedad civil puede hacer que la Río+20 concrete su potencial de inaugurar una nueva etapa en la construcción de un proyecto civilizatorio que supere la crisis ambiental. FASE afirma que es necesario “disputar y cuestionar los paradigmas de las instituciones y actores internacionales que dan soporte al actual modelo”, sin incurrir en el error de pensar que habrá un “cambio brusco y radical en la economía mundial. Se debe pensar necesariamente en la convivencia, en la transición en el mediano y largo plazos”, entre las antiguas formas capitalistas y las nuevas modalidades de relación con la naturaleza que surgen “desde la base” con las prácticas de los pequeños agricultores. Dice la FASE que

Esa transición se hará menos por la reforma interna de las instancias actuales de intervención en la economía, que pretendería reorientar sus estrategias, sus métodos y sus prioridades, y más por la construcción de nuevos espacios, de instituciones nuevas que no estén viciadas por su pasado, sino abiertas hacia una nueva correlación de fuerzas y nuevas agendas. Las actuales instancias continuarán siendo cuestionadas para que actúen y hasta que se reformen, pero se debe esperar que ellas progresivamente pierdan su importancia, cuando y porque a su lado será creado algo radicalmente nuevo que creará económica y políticamente como contrapeso.

La MMM va más allá de esta definición teórica y presenta una estrategia de acción concreta de los movimientos sociales basada en el fortalecimiento de redes y alternativas económicas y en la conquista de derechos como pilar de la unidad de la sociedad civil:

Es necesario profundizar la organización de las agricultoras y de los agricultores, extractivistas, pueblos y comunidades tradicionales en sus territorios, con el objeto de fortalecer los principios y acciones de cooperativismo y sus interlocuciones con las redes regionales, estatales y nacionales como estrategia de resistencia y construcción de alternativas. En este contexto es crucial la generación de alternativas económicas. La apropiación del debate alrededor de los derechos puede facilitar y fortalecer el diálogo de nuestras redes y movimientos con la sociedad de modo general, para visibilizar la importancia de los modos de vida de estas comunidades para la garantía de los derechos humanos, como el derecho a la alimentación adecuada y saludable.

En resumen, cabe resaltar que el concepto de transición ofrecido por FASE en conjunto, con la estrategia presentada por MMM y con la acción de base defendida por Vía, permiten que la convergencia con el sindicalismo y otras organizaciones de la sociedad civil defiendan la negociación en los foros de la ONU y comparten también el diagnóstico anticapitalista se materialice en la Cúpula de los Pueblos.

5. Conclusión

A lo largo de este artículo buscamos estudiar las concepciones y formulaciones de los movimientos sociales de América del Sur sobre la crisis ambiental que vive actualmente la humanidad, así como sobre las propuestas y proyectos que viene elaborando la sociedad civil organizada para la solución del problema ambiental. Para ello hicimos un breve resumen sobre la arquitectura institucional internacional en la cual se mueven los movimientos sociales en defensa de su agenda para el tema ambiental, así como realizamos un análisis sobre la coyuntura política sudamericana con la cual se deparan estos actores de la sociedad civil. Finalmente, identificamos dos posiciones generales que orientan la intervención de los activistas y luchadores sociales en relación a la crisis ambiental de la Tierra y a las estrategias a ser adoptadas en la Río+20. Intentamos demostrar la forma en que estas posiciones dialogan en el sentido de buscar la unidad necesaria y deseada de los movimientos sociales y poblaciones en las movilizaciones que tendrán lugar en Río de Janeiro en 2012.

Es necesario resaltar que esta unidad ya está en curso. En una de esas conferencias de la ONU, como la COPs, la sociedad civil internacional se reunirá en eventos como la Cúpula de los Pueblos, las Asambleas de los Movimientos Sociales, los Foros de Convergencia y de Diálogo sobre medioambiente y desarrollo. El hecho de que los movimientos sociales aquí abordados ya concordaron en realizar una nueva Cúpula de los Pueblos paralela a la Río+20 y que inclusive el sentido estratégico de este encuentro ya fue decidido, como es la lucha por la justicia social y ambiental, indica que están siendo recorridos los caminos para la construcción de la convergencia de la sociedad civil sudamericana.

Las divergencias entre las dos posiciones son dejadas de lado frente al diagnóstico de que la crisis ambiental es grave y amenaza la sobrevivencia de la humanidad y de que el modo de producción capitalista es el gran responsable de este peligro. El rechazo generalizado al concepto de economía verde, tal como fue propuesto por la ONU, acerca aún más a los diversos actores de la sociedad civil. Además, ambos campos se unen en la denuncia de que la Río+20 está siendo vaciada por las principales potencias capitalistas, como los Estados Unidos y la Unión Europea, inmersos en una grave crisis

económica cuya principal consecuencia ha sido la retirada de derechos sociales y políticos de sus pueblos.

La convergencia entre estos dos campos de los movimientos sociales no se viene dada únicamente desde la negativa, o sea, desde la resistencia a los movimientos del capital. Las propuestas que formulan las partes, circulan y son asimiladas colectivamente. Por ejemplo, los movimientos de crítica sistémica apoyan las iniciativas de trabajo decente elaboradas por el movimiento sindical, al tiempo que éste apoya las experiencias de la agricultura familiar y economía solidaria que son ejecutadas por los campesinos y las feministas.

Queda claro que la crisis ambiental provocada por el modo de producción capitalista tiene el potencial de ser el factor que congrega las resistencias populares de la misma forma que la lucha anti neoliberal lo fue en los años 1990 e inicio del siglo XXI. Sin embargo, no es posible prever hoy si esto va a suceder efectivamente. Pero es un hecho que existe la disposición por parte del conjunto de actores aquí analizados, a ser constatado y celebrado. Y en todos ellos fue posible identificar una enorme expectativa respecto a que la Cúpula de los Pueblos paralela a la Río+20 signifique un nuevo marco en la unidad y en la convergencia de los movimientos sociales en todo el mundo y en especial en América Latina.